



REPUBLICA DE COLOMBIA  
**Rama Judicial**

Auto interlocutorio	131
Radicado	05266-31-03-001-2019-00226-00 conexo al 2014-00616
Procedimiento	Ejecutivo
Demandante (s)	Ramón Elías Cardona
Demandado (s)	José Manuel Cardona Tangarife
Asunto	No acepta recusación, ordena remitir expediente digital al tribunal y se abstiene de resolver sobre petición del tercero porque el proceso está suspendido

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE  
ENVIGADO

Veintiséis de abril del año dos mil veintiuno

Se decide sobre la recusación formulada por la abogada Mónica Rueda Arias, apoderada judicial del demandante, la cual funda, en el numeral 8º del art. 141 del C.G. del P., afirmando, en síntesis, que en la última providencia dictada en este proceso –en la cual se ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para investigarla por presuntas irregularidades- el suscrito Juez emitió juicios de valor respecto de su intervención en el proceso, prejuzgándola, olvidando la presunción de inocencia.

También se resolverá la petición elevada por el apoderado judicial del tercero, señor Libardo Antonio Cardona Gallego, en el cual solicita que, debido a que la apoderada judicial del demandante retiró el tracto camión de placas SJT 055 del parqueadero Tulipanes y lo tiene actualmente en uno de la ciudad de Bello, se oficie a dicho parqueadero y se solicite a la Policía Nacional de esa ciudad para el acompañamiento respectivo para la entrega.

I. CONSIDERACIONES:

1. La causal de recusación alegada, es del siguiente tenor:

*“Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, **denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado**, o estar aquéllos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal”.*

2. No acepto la recusación, pues los hechos alegados por la abogada no encajan en la causal invocada, como paso a explicarlo:

2.1 No se trató de una “denuncia” propiamente tal, sino simplemente de ordenar una compulsa de copias al funcionario que tiene el deber de investigar la existencia o no de una presunta conducta delictiva o disciplinaria que se da al interior del proceso.

2.1.1 La misma Ley –Código de Procedimiento Penal-, art. 67, hace tal diferencia. Después de hablar, en el inciso primero, del deber de “denuncia”, en el segundo, consagró: “El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación, si tuviere competencia para ello, en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

2.1.2. La Corte Constitucional, en la sentencia C-848 del 2014, hizo claridad en que la “denuncia” es sólo una forma de la llamada “noticia criminal”, lo que implica que no se puede confundir con otras formas en que la autoridad encargada de investigar los presuntos delitos, tiene conocimiento de ellos:

*“La gestión estatal inicia con lo que se denomina la “la noticia criminal”. Aunque en abstracto esta noticia se puede obtener también por otros medios formales, como una petición especial del Procurador General de la Nación o el Defensor de Familia o Agente del*

Ministerio Público, u otro medio oficial como informes de la policía o de otra autoridad que haya tenido conocimiento de la presunta conducta delictiva, o incluso por medios informales como podrían ser notas de prensa o comunicaciones anónimas, el conducto regular es el acto de denuncia, mientras los demás mecanismos tienen más bien un carácter excepcional.

No es casual que el mismo Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004) haya establecido el deber de denuncia, pues dentro del diseño del procedimiento penal, constituye la “puerta de entrada” al sistema de administración de justicia, y por esta vía, a la protección de los derechos que han sido violentados por la realización del delito”.

2.1.3 En ese mismo sentido, es decir haciendo diferencia entre la denuncia y la mera compulsión de copias, ha dicho la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:

2.1.3.1 “En efecto, la “causal de recusación” que invocó la entidad querellante fue puntualmente analizada por el juzgador de primer grado encartado, llegando a la conclusión que no había lugar a ello, toda vez que, se itera, la «compulsación de copias y la denuncia penal son dos estadios diferentes, la primera va encaminada a que se «investigue y compruebe la comisión de un posible hecho punible», mientras que la segunda, está enfocada a que una vez presentada por la víctima «permiten el ejercicio del tercero denunciante para hacer efectivos los daños y perjuicios (...)”<sup>1</sup>.

2.13.2 Más recientemente, expresó: “Es pertinente reseñar, la orden de expedir copias de algunas piezas procesales, dada por el Juzgado accionado con el propósito de que se investigara disciplinariamente a Lozano Guevara, no constituye mérito suficiente para apartar al funcionario del conocimiento del aludido decurso.

---

<sup>1</sup> CSJ. Civil, STC2029 de 20 de febrero de 2014, exp. 2013-02248-01.

*Lo antelado, habida cuenta que tal postura tiene asidero en las potestades “de ordenación y correccionales” conferidas a los jueces en los cánones 42 a 44 del Código General del Proceso.*

*No refulge con claridad la manera en la cual se puede ver afectado el criterio e imparcialidad de la citada dependencia con la simple remisión de la actuación a fin de que el competente determine si con el proceder del señalado profesional del derecho se quebrantaron normas disciplinarias.*

*Nótese, esa conducta del juez difiere, drásticamente, de la interposición de una queja o denuncia, pues en estas últimas, la persona que las formula está endilgando directamente la comisión de una actuación reprochable, penal o disciplinariamente, mientras que la aludida autoridad judicial procuró que los facultados legalmente discernieran si el abogado Juan Carlos Lozano Guevara, acá promotor, incurrió en una actitud censurable jurídicamente.*

Este Colegiado, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, en numerosos pronunciamientos expresó respecto de la causal N° 8 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, que la recusación no operaba por el hecho de ordenar la reproducción del expediente y enviar esas pruebas al encargado de adelantar la investigación penal, ya fuera de las partes, los intervinientes o sus abogados.

Ahora, si bien es cierto, con la entrada en vigor del Código General del Proceso, en el numeral 8 del canon 141, se incluyó en la aludida causal las quejas disciplinarias, no lo es menos, la conclusión al respecto no varía, pues independiente de la jurisdicción receptora de los duplicados, es importante entender que la disposición del funcionario en tal sentido, *no lo deja incurso en impedimento alguno para continuar con el trámite*

*pertinente, por cuanto, no dimana un compromiso de su rectitud o de su independencia para conocer del asunto”<sup>2</sup>.*

2.2. Si en gracia de discusión se aceptara que la compulsa de copias se equipara a una “denuncia”, cuestión que no se acepta, debe tenerse en cuenta que la decisión que tomé fue en ejercicio de una potestad jurisdiccional, regulada en los arts. 42<sup>3</sup> y 81<sup>4</sup> del C. G. del P., la que “*no está desligada de la responsabilidad que tiene el director del proceso de garantizar el normal desarrollo del mismo, el cumplimiento de los términos, la observancia de los derechos y los deberes de los sujetos procesales y de los terceros llamados a intervenir, y de colmar las expectativas que puso en él la sociedad al encargarlo de dirimir los conflictos generados en su interior. De allí la importancia de dotarlo de facultades que le permitan asegurar sin excesos el cumplimiento de la labor encomendada, prerrogativa que maneja discrecionalmente como director del proceso en caso de considerarlo necesaria y eficiente*” (Sala Disciplinaria, Consejo Superior de la Judicatura, providencia de agosto 14 de 1997).

Resultaría un contrasentido, que el legislador le imponga al juez una serie de deberes en su función jurisdiccional y que, cuando los ejerza al interior de un proceso, tenga que apartarse del conocimiento del mismo.

Una de las Salas de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín<sup>5</sup>, sobre este especial tópico, dejó sentado:

<sup>2</sup> Corte Suprema de Justicia. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Exp: 11001-02-03-000-2017-01576-00

<sup>3</sup> Norma que regula los “deberes del Juez”.

<sup>4</sup> Disposición que establece la “responsabilidad patrimonial” de los apoderados judiciales, cuando actúen con “temeridad o mala fe”, debiéndose remitir copia “a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional”.

<sup>5</sup> M.P. Julián Valencia Castaño radicado 05001-22030002018-00236, 19 de julio del 2018.

“Según la doctrina nacional<sup>6</sup>, la causal séptima y octava -por guardar similitud- del art. 141 del C.G.P., en cuanto la expresión “denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado”, debe ser entendida de la siguiente manera:

“Sin duda alguna, el ánimo prevenido que se crea contra una persona que denuncia penal o disciplinariamente a otra, o a su cónyuge, compañero permanente, padres o hijos, justifica plenamente la existencia de esta causal, la cual sin embargo ha sido objeto de unas particulares precisiones al señalar la norma que únicamente puede proponerse la recusación cuando la denuncia se formuló antes de iniciarse el proceso civil o “después”, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigaciones. Pone de presente la regulación que en cualquiera de las hipótesis previstas es menester que el denunciado se halle vinculado a la investigación, es decir que se haya formulado imputación y, en segundo término, que si la denuncia es posterior a la iniciación del proceso civil los hechos objeto de investigación penal no se originen en el proceso mismo, deben ser ajenos por entero a él, por cuanto si la denuncia penal tiene como causa algo ocurrido dentro del proceso no se ha erigido la circunstancia como causal generadora de la recusación con el fin de poner coto a la maniobra de denunciar al juez sobre la base de cualquier irregularidad observada dentro del mismo proceso para buscar su desvinculación”.

3. En cuanto a la petición del apoderado judicial del señor Libardo Antonio Cardona Gallego, se le hace saber que este proceso está suspendido desde el momento en que se formuló la recusación, según lo establece el art. 145 del C.G. del P.

## II. DECISIÓN:

---


<sup>6</sup> LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso Parte General. Dupré Editores, Bogotá, 2016, pp. 276 y ss.

Por lo expuesto, se

**RESUELVE:**

1. No aceptar la recusación formulada por la apoderada judicial de la parte demandante.
2. Remítase el expediente virtual a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, para que defina si existe o no la causal de recusación alegada.
3. Abstenerse de resolver sobre la petición del apoderado judicial del tercero, señor Libardo Cardona Gallego.

**NOTIFÍQUESE**

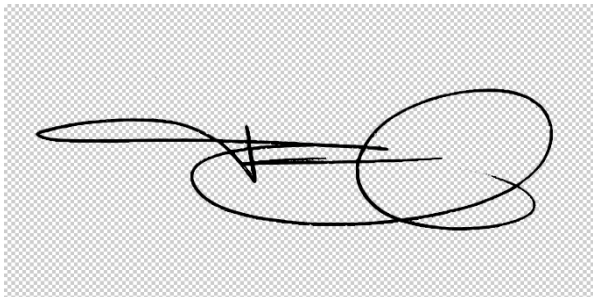


**GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ**  
**JUEZ**

C E R T I F I C O

Que el auto anterior fue notificado en estado No. 042  
fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a las 8 am

Envigado, 28 de abril de 2021

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized, featuring a long horizontal stroke on the left, a vertical stroke in the middle, and a large, rounded loop on the right.

Tatiana Corrales Ramírez  
Secretario